



Plantea la presente consulta si la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, y su normativa de desarrollo, obliga a la supresión de un fichero que ha dejado de utilizarse por cese de la actividad del negocio, así como cuál es el nivel de seguridad que ha de mantenerse en el mismo.

Como es sabido, el artículo 3.b) LOPD define como fichero *“todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”*. No cabe duda de que nos encontramos ante un fichero de titularidad privada, puesto que ha sido creado por una persona física y jurídica para el ejercicio de una actividad inmobiliaria; será por tanto de aplicación el Capítulo II del Título IV de la LOPD, artículos 25 y siguientes.

El artículo 25 versa sobre la creación de los ficheros de titularidad privada, afirmando: *“Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantías que esta Ley establece para la protección de las personas”*; por su parte, el artículo 26 indica que deberá procederse a la notificación e inscripción registral de los mismos, en el momento de su creación:

*“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.*

*2. Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los distintos extremos que debe contener la notificación, entre los cuales figurarán necesariamente el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.*

*3. Deberán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable y en la dirección de su ubicación.*

*4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a los requisitos exigibles.*

*En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su subsanación.*

*5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los efectos”*.

Pero no sólo deberá comunicarse al registro general de esta Agencia la creación del fichero, sino también las modificaciones, conforme al apartado 3, así como la supresión del fichero. Es por ello que el Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por RD 1720/2007 de 21 de diciembre, en adelante RDLOPD, entre los procedimientos tramitados por esta Agencia a que se refiere su Título IX regula, en el Capítulo IV, Sección 1ª, el procedimiento de inscripción de la creación, modificación o supresión de ficheros. Para ello podrán utilizarse los formularios electrónicos disponibles en la página web de esta Agencia, en concreto a través del programa NOTA disponible en el canal del responsable.

Es decir, la declaración a que se refiere la consulta hubo de producirse cuando se creó el fichero y, en su caso, cuando se modificó. Si se trata de un fichero ya inscrito, cosa que desconocemos porque no se ofrecen datos suficientes para identificarlo, deberá inscribirse en el Registro General la supresión del fichero, haciendo constar la cancelación y bloqueo de los datos. Si en su día no se declaró a esta Agencia la creación del fichero, carecerá ahora de sentido comunicar su supresión.

Y es que, respondiendo a la segunda cuestión planteada, los datos de carácter personal habrán de ser cancelados cuando dejen de ser necesarios para las finalidades para las que fueron recabados; sin perjuicio de ello, se procederá al bloqueo de los datos para que puedan ser utilizados en caso de exigirse algún tipo de responsabilidad.

En este sentido, el art. 4.5 LOPD afirma:

*“Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.*

*No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.*

*Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos”.*

Y en su desarrollo, el art. 8.6 RDLOPD:

*“Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.*

*No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación*

*jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.*

*Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento”.*

Por tanto, una vez cancelados y bloqueados los datos, deberán preservarse las mismas medidas de seguridad que existían durante la vigencia del fichero sólo en la medida que sean necesarias para asegurar la adecuada custodia de los datos, que sólo sean accesibles por la persona especialmente designada y que la información sea legible para que esté a disposición de quién esté legitimada para solicitarla. Así, aunque el fichero en origen tenía medidas de seguridad de nivel alto, en virtud del art. 32.5 de la Ley 10/2010, no será necesario que se adopten sistemas de gestión de soportes y documentos a que se refieren los arts. 92, 97 y 101 RDLOPD, puesto que no cabe la entrada y salida de soportes. Tampoco la realización de copias de respaldo o recuperación, o la realización de una auditoría bianual. O la determinación de funciones y obligaciones de usuarios, puesto que los mismos no existen; pero existirán otras obligaciones que sí deberán mantenerse, puesto que ha de asegurarse que únicamente podrá acceder a los datos quien esté expresamente designado – en este caso se afirma el director financiero. Deberá también garantizarse que la información está debidamente custodiada, bien con restricciones de acceso físico, bien limitaciones a los sistemas informáticos.